



## SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Demandante:** GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA  
**Demandado:** PORVENIR S.A.  
**Procedencia:** JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Providencia:** SENTENCIA n.º 72  
**Radicado n.º:** 05001-31-05-018-2017-00539-01 (O2-22-078)

En Medellín, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA2011567-2020 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir los recursos de apelación propuestos por la demandante, dentro del proceso ordinario instaurado por **GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA** en contra de **PORVENIR S.A.** y de **ESTEFANY TEJADA RAMÍREZ** y **MATEO TEJADA RAMÍREZ**, en el cual intervino *ad excludendum* **LUZ ELENA AREIZA MAZO**, proceso radicado bajo el n.º 05001-31-05-018-2017-00539-01 (O2-22-078).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda,

### 1. ANTECEDENTES

Mediante gestora judicial, la señora **GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA** persigue el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por **LUIS ALBEIRO TEJADA URIBE** (q.e.p.d.), los intereses moratorios, en su defecto la indexación de las condenas, y las costas procesales, con fundamento en que convivió con el precitado desde el 3 de septiembre de 2011 hasta el día de su fallecimiento, acaecido el 27 de diciembre de 2016, de lo que da cuenta su afiliación a COMFAMA; que el 21 de febrero

de 2016 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente supérstite, la que le fue denegada a la demandante mediante comunicado del 3 de abril de 2017, en razón a que la señora LUZ ELENA AREIZA MAZO igualmente reclamó dicha prestación económica como compañera permanente supérstite, indicando la AFP que debían acudir a la jurisdicción para resolver el conflicto entre beneficiarias; que los hijos menores de edad del causante ESTEFANY TEJADA RAMÍREZ y MATEO TEJADA RAMÍREZ, también reclamaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente; y que el 9 de mayo de 2017, peticionó a la AFP la realización de una investigación administrativa, la que fue denegada mediante comunicación del 31 de mayo de 2017.

### **1.1 TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

La demanda fue admitida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 25 de julio de 2017 (doc. 01 pág. 68), con el cual integró la litis con los menores ESTEFANY TEJADA RAMÍREZ y MATEO TEJADA RAMÍREZ, en calidad de litisconsortes necesarios por pasiva, a la vez de disponer la citación de LUZ ELENA AREIZA MAZO como interviniente excluyente, y ordenando su notificación y traslado a la parte accionada.

Una vez notificada (ibíd. pág. 77), el 9 de noviembre de 2017 LUZ ELENA AREIZA MAZO interpuso demanda de intervención excluyente a través de vocero judicial (doc. 172 y ss.), pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por LUIS ALBEIRO TEJADA URIBE (q.e.p.d.), los intereses moratorios o en subsidio la indexación de las condenas, y las costas procesales, con fundamento fáctico en que fue compañera permanente del causante desde el 25 de septiembre de 1990 hasta la fecha del óbito, de lo cual da cuenta su afiliación a COMFENALCO, y habiendo procreado en tal lapso a una hija de nombre María Eugenia Tejada Areiza, quien es mayor de edad; que el 1º de febrero de 2017 reclamó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, el cual le fue negado el 3 de abril de 2017 por la AFP accionada, la que manifestó que era la justicia ordinaria quien debía decidir sobre el reconocimiento pensional; y que los hijos menores de edad del causante ESTEFANY TEJADA RAMÍREZ y MATEO TEJADA RAMÍREZ, también reclamaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la que les fue reconocida.

Luego de su notificación (ibíd. pág. 109), PORVENIR S.A. contestó la demanda principal el 9 de noviembre de 2017 (ibíd. pág. 118 y ss.) a través de poderhabiente judicial, quien

únicamente se opuso a las pretensiones de reconocimiento de intereses moratorios, indexación y costas procesales, por haber perdido competencia para resolver la solicitud pensional de las señoras JIMÉNEZ y AREIZA, al presentarse un conflicto de beneficiarias que únicamente puede ser resuelto por vía judicial, al tiempo de formular las excepciones de mérito que denominó: buena fe, y prescripción. En igual sentido, dio respuesta a la demanda de intervención excluyente el 29 de noviembre de 2017 (ibíd. pág. 258 y ss.), oponiéndose únicamente a las pretensiones de reconocimiento de intereses moratorios, indexación y costas procesales y formulando las excepciones de fondo que tituló: buena fe, y prescripción.

A su turno, el curador *ad litem* de ESTEFANY TEJADA RAMÍREZ y MATEO TEJADA RAMÍREZ (ibíd. pág. 98). después de notificado y posesionado (ibíd. pág. 117), dio respuesta a las demandas el 1º de diciembre de 2017 (ibíd. pág. 275), manifestando que no se oponía a las mismas por no contener pretensiones contra sus prohijados.

## **1.2.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO**

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida 24 de febrero de 2022 (docs. 14 y 15), oportunidad en la cual la cognoscente de instancia absolvió a la AFP PORVENIR S.A. de todas las pretensiones incoadas en su contra por GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA y por LUZ ELENA AREIZA MAZO, ordenando a dicha entidad acrecer el porcentaje de la pensión de sobrevivientes reconocida a los hijos menores supérstites del causante, a la vez de gravar en costas a las demandantes y en favor de la AFP y los hijos derechohabientes.

## **1.3 APELACIÓN**

Decisión que fue recurrida oportunamente en apelación por la poderhabiente judicial de la demandante JIMÉNEZ CASTAÑEDA, en cuyo sustento afirmó que si bien los testimonios no brindan certeza de la convivencia de su representada con el causante, los 3 certificados de afiliación a Comfama sí dan cuenta de la misma desde el año 2012, así como la historia clínica de 2016 en la que el mismo causante manifestó que ella era su compañera permanente o “esposa”, como también en un formulario de prestaciones económicas presentado por su prohijada. Indica que de la historia clínica se desprende que el causante estaba discutiendo con su “esposa” JIMÉNEZ CASTAÑEDA y se tomó un veneno para que no lo dejara. En esa misma dirección, arguye que los testigos sí demuestran que la interviniente AREIZA MAZO no convivía con el causante.

A su turno, la vocera judicial de la interviniente excluyente AREIZA MAZO, apeló la decisión de primera instancia, tras señalar que la cercanía y el parentesco de los testigos escuchados en el plenario implica que deba dárseles mayor credibilidad, en vez de desestimar sus dichos, porque fueron quienes tuvieron conocimiento directo de la convivencia, a más de que fueron testificales sinceras respecto a otras relaciones que sostuvo el causante. Afirma que la certificación de Comfama de 2013 que da cuenta de una relación entre el causante y la demandante JIMÉNEZ CASTAÑEDA puede obedecer simplemente a un error en las bases de datos de dicha entidad, y en el mismo sentido, el hecho de que en la historia clínica del causante obre una dirección de residencia diferente a la de la interviniente AREIZA MAZO, también puede obedecer a una desactualización de los datos. Finalmente, aduce que el hecho de que la interviniente AREIZA MAZO no hubiere acudido a la clínica mientras el causante se encontraba en grave estado de salud por envenenamiento, no significa una falta de ayuda o socorro mutuo, porque todos manejan el duelo de formas diferentes.

#### **1.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA**

En la oportunidad legal para alegar de conclusión, la apoderada judicial de la demandante, allegó los alegatos de conclusión en los que expresa que si bien cada testigo individualmente considerado no da fe de la convivencia de la señora GLORIA ELENA JIMENEZ CASTAÑEDA y el señor LUIS ALBEIRO TEJADA URIBE durante los 5 años anteriores al fallecimiento del causante, sí demuestran dicha convivencia en varias épocas, lo que se debe a que a lo largo de la relación tuvieron varios domicilios. En adición, alega que en la última declaración del causante, el señor LUIS ALBEIRO durante su hospitalización previa a su deceso, recibida por psiquiatría, el día 25 de diciembre de 2016, confirma su deseo e intención de permanecer en una relación con su compañera GLORIA ELENA JIMENEZ CASTAÑEDA.

Por su parte, la mandataria judicial de la demandada alegó de conclusión en segunda instancia que ninguna de las supuestas compañeras permanentes logró acreditar los requisitos legales para ser acreedoras de la misma, ello es 5 años de convivencia continuos anteriores a la muerte, y que se trajeron testigos con poca credibilidad y de oídas, situación que imposibilita a la judicatura darles credibilidad. A más de que la señora LUZ ELENA AREIZA MAZO trajo al juicio testigos que no fueron coherentes en sus dichos, y se les notó por parte del despacho el interés de favorecer a la señora AREIZA MAZO.

A su vez, la gestora judicial de la interviniente excluyente alegó de conclusión que los testigos Sandra Milena Urrea, Hilda Mazo Areiza y Liliana María Tejada Uribe dieron cuenta que el causante Luis Albeiro Tejada Uribe vivía con la señora AREIZA MAZO y que fue esta quien estuvo con él hasta el momento del fallecimiento. Adicionalmente, sostiene que la misma demandante reconoció que el causante “amanecía” en un inmueble ubicado en el barrio San Javier y que la misma juez indicó que la prueba documental apoya la convivencia. Expresa que de la historia clínica se extrae que GLORIA ELENA JIMENEZ CASTAÑEDA había afirmado que el señor LUIS ALBERTO era su expareja, y que se tomó un veneno porque ella no quiso volver con él. Esgrime que, no obstante, los inconvenientes que tuvo la pareja, permanecieron unidos, y que la demandante GLORIA ELENA no fue más que un triste episodio en la vida de la pareja.

## **2. ANÁLISIS DE LA SALA**

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la demandante y la interviniente excluyente, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

### **2.1. PROBLEMA JURÍDICO:**

La Sala procederá a dilucidar ¿Si GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA y LUZ ELENA AREIZA MAZO reúnen los requisitos legales para ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes causada por el señor LUIS ALBEIRO TEJADA URIBE (q.e.p.d.) en calidad de compañeras permanentes supérstites? ¿En caso positivo, deberá verificarse en qué proporción y cuantía le corresponde dicha prestación a GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA y a LUZ ELENA AREIZA MAZO, y si se causaron los intereses moratorios pretensos?

### **2.2. TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS.**

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio**, en tanto ni GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA, ni LUZ ELENA AREIZA MAZO acreditaron los requisitos legales

para ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañeras permanentes supérstites, y revocatorio en cuanto a la orden de acrecimiento pensional a favor de los hijos derechohabientes, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

### **2.2.1. Pensión de sobrevivientes**

Al *sub lite* le es aplicable el régimen legal contenido en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, dado que el causante falleció el 27 de diciembre de 2016 (doc. 01 pág. 17).

En orden a lo anterior, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez que fallezca. Punto sobre el cual no hay controversia, puesto que la AFP demandada aceptó y decidió reconocer por el fallecimiento del afiliado LUIS ALBEIRO TEJADA URIBE pensión de sobrevivientes a ESTEFANY TEJADA RAMÍREZ y a MATEO TEJADO RAMÍREZ, en calidad de hijos menores supérstites, mediante comunicado del 24 de mayo de 2017 (doc. 01 pág. 166 a169), sin que tal aspecto hubiese sido reprochado por las partes procesales.

Acreditado que el fallecido sí dejó causado el derecho para que sus posibles beneficiarios puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, conviene resaltar el contenido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, atinente a quiénes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, entre otros, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera(o) permanente supérstites, siempre y cuando dicho beneficiario (a) a la fecha de fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad y acredite la existencia de vida marital con el causante por espacio mínimo de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento, siendo que la acreditación de tales requisitos es carga procesal de los eventuales beneficiarios, tal como lo ha reiterado la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia SL169-2021, en la que sostuvo que la convivencia le incumbe probarla a quien afirma el hecho.

En este punto, resulta menester hacer precisión de que si bien a partir de la sentencia SL1730-2020 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia adoptó una nueva postura, al adoctrinar que el tiempo mínimo de convivencia de 5 años únicamente es exigible en el caso en que el causante sea pensionado, la Sala estima que tal línea de interpretación contraviene el principio constitucional de igualdad, por imponer un trato diferencial a los cónyuges y compañeros permanentes del fallecido según sea afiliado o

pensionado el de cujus, sin que tal discriminación se corresponda con los propósitos de pensión de sobrevivientes o con algún fin constitucional superior (SU-149 de 2021); a más de que desconoce los mandatos constitucionales de universalidad y sostenibilidad financiera del sistema pensional, al incrementar desproporcionadamente el número de reconocimientos de pensiones de sobrevivientes<sup>1</sup>, lo que redundaría en una afectación irrazonable de los reducidos recursos con que el sistema cuenta para garantizar los derechos de quienes legítimamente han accedido a una pensión (SU-149 de 2021); y que, la interpretación en cita resulta abiertamente contraria al precedente constitucional asentado por el máximo tribunal de lo constitucional desde la Sentencia SU-428 de 2016, según el cual *“el requisito de la convivencia durante los últimos cinco años anteriores a la muerte para el compañero o cónyuge supérstite, con el fin de proteger a los beneficiarios legítimos de ser desplazados por quién solo busca aprovechar el beneficio económico. (...) tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes, de manera vitalicia, la compañera permanente supérstite **del afiliado** que tenga 30 años o más de edad, al momento del fallecimiento de este, quien deberá demostrar que hizo vida marital con el causante hasta su muerte y, por lo menos, durante los cinco años anteriores a esta”*.

Por manera que, en derredor de este ítem, la Sala acogerá el precedente constitucional, para exigir los cinco (5) años de convivencia en los casos no solo de pensionados fallecidos sino de afiliados fallecidos según lo dispone el precedente aquilatado desde la Sentencia SU-428 de 2016 y reiterado y precisado más recientemente en Sentencia SU-149 del 21 de mayo de 2021.

De forma que, el asunto que amerita un análisis probatorio exhaustivo es si las señoras GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA y LUZ ELENA AREIZA MAZO cumplen con el requisito de la convivencia en calidad de compañeras permanentes supérstites, para lo cual deberá establecerse si demostraron que convivieron ininterrumpidamente con el causante, como mínimo en el lapso comprendido entre el **28 de diciembre de 2011** y el **27 de diciembre de 2016**.

Ello así, de cara al estudio de la convivencia de la interviniente excluyente LUZ ELENA AREIZA MAZO con el fallecido LUIS ALBERTO TEJADA URIBE, tenemos que no hay duda en que sostuvieron una relación de compañeros permanentes cuando menos desde el 7 de mayo de 1990, pues así lo declaró extraprocesalmente el mismo causante el 7 de mayo de 2010 (ibíd. pág. 24), al tiempo que el 23 de junio de 2009, la señora BEATRIZ

---

<sup>1</sup> Según el Comunicado 18 del 21 de mayo de 2021 de la Corte Constitucional, “(...) el pasivo pensional aumentaría en 461 %, según estimaciones aportadas en sede de revisión.”

ELENA TEJADA URIBE, hermana del causante, manifestó en un contrato pre-exequial que su hermano LUIS ALBERTO TEJADA URIBE y la interviniente eran compañeros permanentes (ibíd. pág. 250). Circunstancia que se verifica igualmente en el hecho de que para el 30 de noviembre de 2011, el causante figuraba como beneficiario de la interviniente en la caja de compensación familiar Comfenalco (ibíd. pág. 189).

Es más, se tiene que posteriormente, el causante nuevamente reiteró su unión como compañero permanente con la interviniente el 25 de marzo de 2012, en un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble suscrito por ellos con la constructora Acuarela CDO S.A. (ibíd. pág. 225), así como el 16 de mayo de 2012 al recibir un subsidio de vivienda de parte de Instituto Social de Vivienda y Hábitat del Municipio de Medellín (ibíd. pág. 196), y el 19 de noviembre de 2012 al suscribir junto con la interviniente una escritura pública de compraventa de bien inmueble ubicado en la Carrera 119 42AA 07 (ibíd. pág. 198 y 208), inmueble en el que según el dicho de la propia interviniente excluyente, reside en la actualidad (ibíd. pág. 172 y 179).

Empero, de la documental también se desprende que para el 29 de octubre de 2013 y el 23 de junio y el 30 de diciembre de 2016 (ibíd. pág. 41 a 43), el causante ya figuraba en la caja de compensación familiar COMFAMA como beneficiario de la demandante GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA, lo que indica que para tales fechas, ya había dejado de figurar en las cajas de compensación familiar como compañero permanente de la señora AREIZA MAZO.

Inclusive, se advierte que para el 4 de abril de 2016, el causante consultó el servicio de urgencias médicas por una contusión en el pie izquierdo, sin acompañante, y para ese momento reportó que residía en la carrera 75 B 91 32, una dirección totalmente diferente a la que la interviniente LUZ ELENA AREIZA MAZO reporta desde el año 2012. A más de que en la misma consulta médica, el causante afirmó que su contacto en caso de emergencias era “GLORIA”, mismo nombre de la demandante, a quien identificó como su “ESPOSA”, de lo que se sigue que para tal fecha el causante no convivía ya con la interviniente LUZ ELENA AREIZA MAZO.

Ahora bien, alega la alzada que lo reflejado en la historia clínica se debió a un error o falta de actualización de la misma por el personal de la institución médica, afirmación poco creíble, habida cuenta que el 4 de abril de 2016 el causante acudió a urgencias sin acompañante, por manera que no era posible que otra persona suministrara dichos datos en vez del causante. Además, la posibilidad de que la información de residencia y



compañera permanente reflejada en la historia clínica sea un error, se desvanece ante el hecho de que el 24 de diciembre de 2016 el causante reiteró los mismos datos de residencia y compañera permanente al acudir a urgencias médicas por ingesta de herbicida (ibíd. pág. 52), momento para el cual sí acudió a la institución médica en compañía de la demandante GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA. En todo caso, refulge palmar que la afirmación de la aladista carece de prueba alguna, en tanto no obra ningún material probatorio que pueda dar fe del alegado error, siendo que la prueba de tal afirmación le competía a la parte que la alega según el artículo 167 del CGP.

Frente a la testimonial arimada por la interviniente excluyente, ha de puntualizarse que la *a quo* no la desestimó por el simple hecho de que se tratase de parientes o personas muy allegadas a la interviniente, como erradamente parece entender la censura, sino que su desmerecimiento obedeció a que lo depuesto se encuentra en abierta contradicción con la demás pruebas obrante en el legajo, y dicha contradicción evidencia un ánimo de favorecimiento hacia la interviniente, al punto que se aprecian parcializados, como bien lo asentó la *a quo* y que comparte plenamente la Sala, por las razones que pasan a exponerse.

HILDA LUCÍA MAZO AREIZA (min. 3:21:00 y ss.), además de ser prima de la causante, manifestó que el causante nunca se había ido del hogar que conformó con la interviniente, reiterando en varios asertos que nunca se separaron, y que no sabía por qué se había suicidado el causante. También, la testigo LIIANA MARÍA TEJADA URIBE (min. 2:41:00 y ss.), hermana del causante, declaró que no sabía por qué el causante había tomado veneno, que vino a conocer a la señora JIMÉNEZ CASTAÑEDA el día que falleció el causante, y que el causante y la interviniente excluyente nunca se separaron, pues lo único que hacía el demandante era perderse los fines de semana, pero sin ánimo de finalizar la relación con la interviniente.

Atestiguaciones que contradicen abiertamente las propias declaraciones del causante plasmadas en su historia clínica del 4 de abril de 2016, según la cual residía en una dirección diferente a la de la interviniente excluyente, y conforme a aquella que su “ESPOSA” se llamaba “GLORIA” (ibíd. pág. 50), lo que desdice de una relación de apenas los fines de semana; así como tales testigos también evidencian un profundo desconocimiento de la vida sentimental del causante, toda vez que afirman no saber la razón por la cual el causante se suicidó, razón que de conformidad con la historia clínica del 24 de diciembre de 2016, fue porque el causante ingirió herbicida con la finalidad de

persuadir a GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA para reanudaran relación de pareja que habían sostenido.

De igual forma, la testigo SANDRA MILENA URREA URREA (min. 4:00:00 y ss.) afirmó que conoció a la interviniente en el año 2012 o 2013, que llegaron a vivir a la misma propiedad horizontal, y que finalizando el año 2016 estuvo visitando a su mamá en un pueblo, por lo que se dio cuenta del fallecimiento del causante hasta enero de 2017 que regresó a Medellín, de lo que se sigue que no podría dar fe de que la convivencia se dio desde el año 2011, ni que la misma perduró hasta el 27 de diciembre de 2016, pues la única forma de que le constaran tales hechos sería por conocimiento de oídas, e inclusive reconoció que entre 2012 y 2016, apenas llegó a ver al causante unas 7 veces en casa de la interviniente, denotando su escaso conocimiento real de la supuesta convivencia de la pareja TEJADA AREIZA.

De suyo que, ante la falta de fuerza de convicción de la prueba testimonial, se impone considerar que si bien la señora LUZ ELENA AREIZA MAZO acreditó haber sido compañera permanente del causante desde el año 1990, lo cierto es que no acreditó que dicha relación marital de hecho hubiere perdurado sin interrupciones hasta el momento del óbito, concretamente, no acreditó que sostuvo ininterrumpidamente la calidad de compañera permanente con el causante entre el 28 de diciembre de 2011 y el 27 de diciembre de 2016, *a contrario sensu*, la documental refleja que a partir del año 2013, el pasó a figurar en las cajas de compensación familiar como compañero permanente de GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA, y que para el año 2016, éste reportaba una dirección de residencia diferente a la de la señora AREIZA MAZO, así como también reportaba que su compañera permanente era la señora JIMÉNEZ CASTAÑEDA, y no la señora AREIZA MAZO.

En cuanto la señora GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA, tenemos que también se acreditó que esta sostuvo una relación de compañeros permanentes con el causante LUIS ALBEIRO TEJADA URIBE, en tanto así se desprende el certificado expedido por Comfama el 29 de octubre de 2013 (ibíd. pág. 41), según el cual desde el 6 de marzo de 2012, el causante figuraba en las bases de datos de esa entidad como compañero permanente de aquella. Situación que fue reafirmada por el causante el 4 de abril de 2016, cuando asistió al servicio de urgencias médicas sin acompañante, y reportó que residía en la carrera 75 B 91 32, misma dirección en la que residía la señora GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA para tal época (ibíd. pág. 44); a la vez de reportar que

su contacto en caso de emergencias era “GLORIA”, la demandante, a quien identificó como su “ESPOSA”, de lo que se sigue que para tal fecha el causante convivía con ella.

No obstante, la prueba documental también refleja que dicha relación de compañeros permanentes tampoco perduró hasta la fecha de fallecimiento del causante, toda vez que el 24 de diciembre de 2016, cuando el causante acudió nuevamente al servicio de urgencias médicas, si bien reportó los mismos datos de residencia y compañera permanente que ya había reportado anteriormente (ibíd. pág. 52), lo cierto es que en la historia clínica se indica que la consulta médica se produjo por un intento de suicidio del causante, motivado en que el causante amenazó a su “ex – pareja”, la demandante JIMÉNEZ CASTAÑEDA, con quitarse la vida si esta última no volvía a tener una relación de pareja con él (ibíd. pág. 242).

Es decir, que al referirse en la historia clínica a la demandante como la expareja del causante, y que el intento de suicidio del causante se debió a que éste quería “*persuadirla de volver con él*”, se concluye sin hesitación alguna que, para el 24 de diciembre de 2016 la relación de compañeros permanentes del causante y la demandante había terminado por la real y efectiva intención de la demandante de finalizar su vínculo con el causante, y no por una simple pelea de pareja pasajera como alega la alzada, lo que implica, cuando menos, que para tal data se produjo una interrupción en la convivencia, con independencia de si posteriormente el causante y la demandante quisieron reanudar la relación de pareja y la convivencia.

Respecto de la testimonial, de manera liminar ha de relievase que LIGIA DEL SOCORRO ROMÁN PELÁEZ (min. 57:24 y ss.) depuso que conoció a la demandante porque se veían en un barrio llamado El Picacho, pero que cuando la demandante se fue de El Picacho no volvió a saber de ella, puesto que nunca la llegó a visitar en otro barrio distinto a ese, y visto que según la documental la demandante comenzó a vivir en el barrio Robledo desde el 11 de noviembre de 2013 (ibíd. pág. 44), ha de concluirse que dicha testigo no puede dar fe de la convivencia de la pareja TEJADA JIMÉNEZ con posterioridad a tal data; y en cuanto al extremo inicial de la relación de pareja, tampoco puede establecerse la misma con dicho testimonio, pues al respecto la deponente indicó que no recordaba la fecha a partir de la cual conoció a la demandante, y solo atinó a decir que dicha pareja vivió “*como 5 años juntos*”, pero sin dar fechas, y debiéndose desestimar tal aseveración, puesto que, como ya se dijo, a partir del año 2013 todo lo que pudo saber sobre la pareja en comento lo fue de oídas.

Luego, la testigo ALBA LUCIA LÓPEZ OCAMPO (min. 26:04 y ss.) reveló que era compañera de trabajo con la demandante porque fueron compañeras de trabajo durante 22 años, pero al ser inquirida sobre por qué le constaba que la demandante había convivido con el causante, expresó que lo sabía “*porque ella nos comentó*”, y por ende, es una testigo de oídas de escaso poder persuasivo.

Finalmente, tenemos que la testigo MARÍA DEL ROSARIO CASTAÑO CARDONA, (1:53:00 y ss.) manifestó que conoció a la demandante hasta el 11 de noviembre de 2013, que se mudó del barrio El Picacho al barrio Robledo, por lo que no podría constarle directamente la convivencia de la demandante y el causante luego de tal calenda; al tiempo que indicó que conoció a la demandante desde el año 2008, y que le constaba que ella convivió con el causante desde el año 2011, pero que no podía precisar el mes y el día, por lo que tampoco puede verificar que la convivencia se dio, cuando menos, desde el 28 de diciembre de 2011.

De suerte que, GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA, a pesar de haber indicado que fue compañera permanente del causante desde el año 2012, con la certificación de la caja de compensación familiar, la verdad es que ante la pobre fuerza de convicción de la prueba testimonial aportada, se impone concluir que tampoco acreditó que dicha relación marital de hecho hubiere perdurado sin interrupciones hasta el momento del óbito, más específicamente, no acreditó que sostuvo ininterrumpidamente la calidad de compañera permanente con el causante entre el 28 de diciembre de 2011 y el 27 de diciembre de 2016, habida cuenta que la documental refleja que para el 24 de diciembre de 2016 ni siquiera eran pareja, de lo cual se puede inferir que dicha convivencia se encontraba interrumpida.

Es de anotar, que los testigos de oídas carecen de suficiente fuerza suasiva, al provenir su conocimiento de personas respecto a las cuales la contraparte no puede ejercer el derecho de contradicción ni el juzgador puede verificar la ciencia o razonabilidad de su dicho, o provienen inclusive de la misma parte procesal interesada que lo trajo al proceso y, por contera, se estaría posibilitando que los sujetos procesales puedan crear su propia prueba, cuyo desmerecimiento probatorio se impone en virtud de una regla de valoración de la prueba que ha establecido la jurisprudencia nacional de manera uniforme frente al testimonio *ex auditur*, como reiteró la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del SC-076 de 2007.

En el mismo sentido, se precisa que lo asentido por la demandante y la interviniente al absolver interrogatorio de parte únicamente constituye prueba en tanto lo manifestado le sea desfavorable a ella o favorable a su contraparte, conforme la regla de valoración probatoria establecida en el numeral 2 del artículo 191 del CGP, y según la máxima de la experiencia conforme a la cual las personas no mienten en lo que les desfavorece, pero sí podrían hacerlo en lo que les beneficia, a más de que darle valor probatorio a tal declaración de parte en beneficio de quien la emite, también supondría una abierta oposición al principio probatorio según el cual a la parte le está vedado confeccionar o construir su propia prueba.

Conforme a todo lo expuesto, al aplicarse los criterios de la sana crítica en racional y libre persuasión, según lo dispuesto en el artículo 61 del CPT y de la SS, del cardumen probatorio recaudado se concluye que no se probó en el plenario que las señoras LUZ ELENA AREIZA MAZO y GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA hubieren conformado una comunidad de vida con vocación de permanencia y convivencia ininterrumpida con el señor LUIS ALBEIRO TEJADA URIBE, como mínimo entre el 28 de diciembre de 2011 y el 27 de diciembre de 2016, y por tanto, no acreditaron el requisito legal aludido para ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañeras permanentes supérstites, debe confirmarse en este ítem la sentencia de primera instancia.

Ahora, frente a la orden de la *a quo* de acrecentar al 100% la mesada pensional de los hijos supérstites del causante ESTEFANY TEJADA RAMÍREZ y MATEO TEJADA RAMÍREZ que fueron reconocidos por la AFP como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, ha de relievase que ni en la demanda inicial, ni en la demanda de intervención excluyente se pretendió dicho acrecimiento.

Punto en derredor del cual ha de precisarse, que la AFP accionada no reconoció a ESTEFANY TEJADA RAMÍREZ y MATEO TEJADA RAMÍREZ el 50% de la pensión de sobrevivientes, sino que les reconoció el 33,3% de la prestación, asignando a cada uno apenas el 16,6% de las mesadas(ibíd. pág. 166), dejando otro 16,6% en suspenso hasta tanto la otra hija supérstite del causante, MARÍA EUGENIA TEJADA AREIZA, acreditara estar cursando estudios (ibíd. pág. 186); toda vez que ésta última a pesar de ser mayor de edad para la época del óbito, era menor de 25 años.

Ello así, se advierte que MARÍA EUGENIA TEJADA AREIZA no fue citada ni vinculada al proceso, lo que aunado al hecho de que el acrecimiento al 100% nunca fue pretendido por GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA, ni por LUZ ELENA AREIZA MAZO, implica

que la *a quo* no podía pronunciarse ordenando acrecentar al 100% las mesadas pensionales percibidas por ESTEFANY TEJADA RAMÍREZ y MATEO TEJADA RAMÍREZ, puesto que no se reunían los requisitos exigidos por el artículo 50 del CPT y de SS para fallar *extra petita*, habida cuenta que los hechos que originaría el acrecimiento de ESTEFANY TEJADA RAMÍREZ y MATEO TEJADA RAMÍREZ en desmedro de MARÍA EUGENIA TEJADA AREIZA no fueron discutidos en el proceso ni están debidamente probados.

De forma tal que, habrá de revocarse la orden de acrecimiento dispensada por la *a quo*, siendo la AFP quien deberá proceder a acrecentar la mesada pensional de los actuales hijos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, según la edad y escolaridad que hubieren acreditado o llegaren a acreditar ante tal administradora, una vez resuelto judicialmente el conflicto de beneficiarios presentado entre quienes alegaron ostentar la calidad compañeras permanentes supérstites.

### 2.3. COSTAS

Costas en esta instancia en a cargo de GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA y de LUZ ELENA AREIZA MAZO, por haberse resuelto desfavorablemente los recursos de apelación interpuestos, según lo dispuesto por el artículo 365 del CGP, a favor de PORVENIR S.A. y de ESTEFANY TEJADA RAMÍREZ y MATEO TEJADA RAMÍREZ, fijándose las agencias en derecho en la suma de **\$1.160.000** equivalente a un SMMLV a cargo de cada una de ellas, a favor de PORVENIR S.A en un 50% y en favor de ESTEFANY TEJADA RAMÍREZ y MATEO TEJADA RAMÍREZ en el restante 50%.

Las de primera instancia se confirman, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., por cuanto no fueron materia de apelación.

### 3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

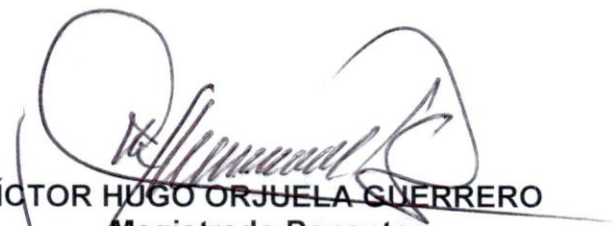
**PRIMERO: REVOCAR** el numeral SEGUNDO de la sentencia materia de apelación proferida el 24 de febrero de 2022 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar, absolver a PORVENIR S.A. de la condena impuesta, según y conforme las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en lo demás, la sentencia que se revisa en apelación.

**TERCERO: COSTAS** en esta instancia a cargo de GLORIA ELENA JIMÉNEZ CASTAÑEDA y de LUZ ELENA AREIZA MAZO, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000 equivalente a un SMMLV a cargo de cada una de ellas, y a favor de PORVENIR S.A en un 50% y en favor de ESTEFANY TEJADA RAMÍREZ en un 25% y de MATEO TEJADA RAMÍREZ en el restante 25%. Las de primera instancia se confirman.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogiéndose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.


Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente electrónico al Juzgado de origen. Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron. **Comuníquese, notifíquese y cúmplase.**



**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**  
Magistrado Ponente



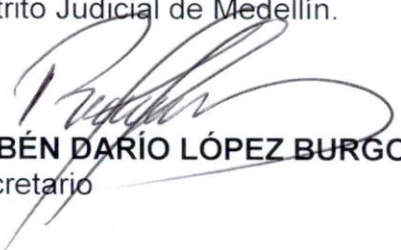
**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**  
Magistrado



**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**  
Magistrada

**CONSTANCIA SECRETARIAL**

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario